

NOTA DE TRANSMISIÓN

de la: Secretaría

a la: Convención

Asunto: Contribución de los miembros PES de la Convención
- "Prioridades para Europa"

El Presidente de la Convención ha recibido de los miembros de la Convención pertenecientes al Partido Socialista Europeo la contribución ¹ que se recoge en el Anexo.

¹ Se nos han transmitido las 11 versiones lingüísticas, que estarán disponibles lo antes posible en el sitio web de la Convención.

Prioridades para Europa

El Partido Socialista Europeo en la Convención sobre el Futuro de Europa

3 de octubre de 2002

Un tercio de los miembros de la Convención pertenecen al Partido Socialista Europeo. Representan a la Unión Europea, a sus Estados miembros y a los países candidatos a la adhesión. El presente documento se publica en el momento en que empiezan los trabajos concretos de elaboración de una nueva Constitución Europea. Establece la visión de una Europa con una poderosa dimensión social y una democracia mejorada.

A medida que avancen los trabajos de la Convención se irán publicando documentos más detallados que examinarán los aspectos del debate sobre el futuro de Europa. Antes de que el trabajo de la Convención concluya en junio de 2003, se publicará un documento de posición definitivo.

Construir una Unión Europea para todos

Nosotros, los socialistas y socialdemócratas europeos, queremos construir una democracia europea –una Europa para los ciudadanos– basada en la doble legitimidad de los Estados miembros y de los pueblos de Europa, que se apoye en los valores que los europeos compartimos. Estos valores se proclamaron en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuya esencia reside en el modelo social Europeo de equilibrio entre la competencia y la solidaridad y en los principios de igualdad y respeto por las minorías.

La creación de una Europa abierta y eficiente, más democrática, significa que debemos reformar las estructuras comunitarias existentes. La integración europea depende de una mayor legitimidad democrática, que requiere más transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones en el ámbito europeo. La reforma debe venir acompañada de grandes esfuerzos para promover la comprensión pública de la Unión Europea y sus ventajas. Debemos fomentar la participación del ciudadano en la política y debemos dar al ciudadano lo que éste desea y necesita.

Europa no debe ser un oscuro proyecto destinado a los tecnócratas y la elite política: en él deberían participar todos ciudadanos de la Unión, independientemente de su posición en la vida. Los horizontes de Europa deben abarcar algo más que las cuestiones meramente económicas: sus ambiciones políticas no deben dejarse arrastrar por los vientos del libre mercado.

La mejora de la democracia comunitaria reforzará la democracia local, regional y nacional.

Los miembros socialistas y socialdemócratas de la Convención sobre el futuro de Europa plantean el desarrollo a todos los niveles de comunidades que encuentren su estímulo en la competencia, que se apoyen mediante la cooperación y que se unan a través de la solidaridad.

Un marco de reforma

El ciudadano está confundido por la forma en que se organizan los asuntos en la Unión Europea. Tenemos cuatro tratados en los que se establecen más de mil artículos, además de numerosos protocolos; tenemos dos instituciones distintas: la Comunidad Europea y la Unión Europea.

Para minimizar la confusión y disipar la percepción de que Europa no es suficientemente abierta, debemos simplificar y reorganizar los tratados.

Necesitamos dos textos. El primero incluirá los principios básicos de la Unión Europea y su Constitución. El segundo establecerá las políticas en detalle.

La Constitución Europea definirá el carácter de la Unión, incluidos sus objetivos y sus misiones, sus facultades e instituciones y los derechos de los ciudadanos. Asimismo, la Constitución determinará las relaciones entre la Unión, los Estados miembros, las autoridades locales y regionales y los países vecinos: preverá la financiación de la Unión y establecerá un procedimiento de reforma constitucional.

La Constitución deberá incorporar la Carta de los Derechos Fundamentales, firme garantía para los pueblos de la Unión del respeto de sus derechos a nivel comunitario. También incluirá los principios y los valores sociales que deberían inspirar las actividades de la Unión. La adopción de la Carta dará a los ciudadanos otros derechos, sin necesidad de que se amplíen las competencias de la Unión Europea, que deberá ratificar el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

La división de la política en tres "pilares" es otra característica de la Unión Europea que confunde generalmente a los ciudadanos. Estos "pilares" deberán eliminarse cuando la Unión se convierta en una única institución jurídica.

Queremos promover la integración de los países de la Unión y encontrar un marco institucional único para la Unión Europea, conservando la forma excepcional en que Europa ejerce sus competencias: unas veces a nivel comunitario y otras como resultado de la cooperación y la coordinación gubernamental entre los Estados. Por ello será preciso seguir distintos métodos de trabajo en las distintas áreas políticas y tendremos que adoptar medidas específicas para la Política Exterior y de Seguridad Común.

La Unión, una vez reformada, debería conservar las principales disposiciones de los tratados relativas a sus relaciones con los Estados miembros (por ejemplo, las que permiten a los países progresar en determinadas áreas políticas con mayor rapidez que la Unión en su conjunto, la llamada "cooperación reforzada"). Otra medida que se debería conservar, establecida en el Tratado de Niza, es el procedimiento aplicable a la contravención de los principios democráticos.

El carácter específico de las regiones más distantes de la Unión Europea, como las Islas Azores, las Islas Canarias y los Departamentos de ultramar franceses deberá protegerse en la Constitución Europea.

Sería oportuno crear un nuevo estatuto para los países vecinos de la Unión Europea que no tienen intención de adherirse. Esto nos permitiría reforzar los lazos políticos económicos y culturales que nos unen.

Si con este nuevo marco institucional se pretende reflejar nuestros valores y nuestras aspiraciones, deberán realizarse ciertos cambios.

Actualizar y enriquecer los objetivos de la Unión Europea

Nuestras aspiraciones con respecto a la actualización y al enriquecimiento de los objetivos de la Unión se resumen en cuatro áreas:

- la **PROMOCIÓN** del desarrollo sostenible y de la cohesión económica y social,
- el **DESARROLLO** de la riqueza cultural de Europa,
- la **SALVAGUARDIA** de los derechos y las libertades, y
- la **REAFIRMACIÓN** de la identidad de Europa en el mundo.

La promoción del desarrollo sostenible debería basarse en el crecimiento, el pleno empleo y un elevado nivel de protección social en una economía social de mercado competitiva, innovadora y dinámica. Nuestro objetivo es construir una sociedad de la información y una economía basada en el conocimiento. Queremos una Europa que ensalce la igualdad entre hombres y mujeres y la mejora de las oportunidades para los jóvenes: debe aceptar el papel esencial de los servicios públicos, la protección del medio ambiente y el respeto por los derechos de las próximas generaciones. Una importante característica de la promoción del desarrollo sostenible en la Unión Europea será la solidaridad entre sus pueblos, sus Estados miembros y sus ciudades y regiones, con el fin de reforzar la cohesión social y económica en toda Europa.

Deberá protegerse la riqueza y la diversidad de las culturas europeas al mismo tiempo que se desarrollen los valores y responsabilidades comunes correspondientes a los derechos de los ciudadanos.

La contribución de los grupos culturales, sociales y religiosos será de crucial importancia para alcanzar este fin.

Nuestro tercer objetivo para la Unión es convertirla en un área de libertad y seguridad personal dotada de un sistema de justicia que garantice el respeto de los derechos y las libertades individuales.

A escala mundial, la Unión Europea deberá reafirmar su identidad, promover nuestro modelo social, combatir los efectos colaterales negativos de la globalización y buscar la seguridad de los ciudadanos europeos dentro de un orden internacional basado en:

- el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y de los acuerdos internacionales,
- la paz y la democracia,
- el respeto de los derechos humanos fundamentales,
- la protección de los derechos del niño,
- la igualdad entre hombres y mujeres,
- el derecho a un entorno saludable,
- la erradicación de la pobreza y de la exclusión de las personas de una vida normal en la sociedad, y
- la promoción de la competencia libre y justa en los mercados del mundo.

Promover los principios básicos

La Unión Europea no debe ser una burocracia centralizada que dicte órdenes a diestro y siniestro. En lugar de eso, las decisiones deberían tomarse en el ámbito de gobierno más adecuado, ya sea local, regional, nacional y Europeo, teniendo presente que estas esferas a menudo tendrán que trabajar conjuntamente para alcanzar sus metas. Así, cuando fuese oportuno, podría conseguirse la participación de los ciudadanos en las decisiones que afectarán a sus vidas y, en su caso, la legislación europea cuando es necesaria, debería limitarse todo lo posible.

Estos principios de subsidiariedad y proporcionalidad son de carácter político. Los parlamentos nacionales necesitan saber que se les respeta antes de que se apruebe cualquier legislación europea, para lo cual, en primer lugar, deberían establecer nuevas formas de revisión de las propuestas legislativas de la Comisión y supervisar las acciones de sus gobiernos en el Consejo.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas debe garantizar el cumplimiento de estos principios.

Fomentar la mayor participación posible del pueblo en el proceso de toma de decisiones (principio de la democracia participativa) llevará a la Unión a reconocer la labor esencial de los partidos políticos europeos como representantes de la opinión pública. Al mismo tiempo, los ciudadanos y las organizaciones que representan grupos de interés concretos deberían tener la oportunidad de contribuir con sus ideas en todos los ámbitos de acción de la Unión Europea. Necesitamos descubrir cómo poner en marcha esas opiniones. El papel de los sindicatos y su derecho a organizar actividades supranacionales, las organizaciones de empresarios y otros interlocutores sociales deberían reconocerse y reforzarse cuando fuese oportuno; y la sociedad civil debería tener derecho a ser consultada en materia de legislación.

Una forma mejor de compartir las competencias

Sería un error configurar una lista rápida e inflexible de las responsabilidades de los Estados miembros de la Unión Europea. Lo que realmente importa es definir el alcance y la escala de la autoridad de la Unión Europea en los ámbitos en los que esto es necesario para que los Estados miembros y los pueblos puedan perseguir sus objetivos comunes. Queremos promover y desarrollar un método comunitario de toma de decisiones en el que las instituciones de la Unión Europea compartan la responsabilidad.

Por consiguiente, la nueva Constitución debería expresar claramente cuáles son las responsabilidades exclusivas de la Unión Europea, así como precisar las áreas en las que ésta comparte la responsabilidad con los Estados miembros. En los ámbitos restantes, que son competencia de los Estados miembros, la Unión Europea puede ofrecer su apoyo mediante la promoción y la coordinación de las políticas nacionales.

La Unión debería estar facultada para actuar enérgicamente, como una unidad política, cuando fuese preciso, pero también debería evitar la imposición de una conformidad innecesaria. Por ello:

- Queremos promover y proteger nuestro modelo social. Debe existir un fuerte vínculo entre la coordinación económica y la coordinación social que nos permita utilizar el potencial económico de la Unión Europea y del euro para alcanzar los objetivos de pleno empleo y un nivel elevado de protección social y para garantizar que los pueblos de todas las regiones de la Unión disfruten de la misma calidad de vida. Debemos establecer prioridades económicas y sociales para toda la Unión Europea, con objetivos políticos en materia de economía, empleo, sociedad y medio ambiente que los Estados miembros deberán alcanzar.
- Debería incluirse la coordinación de políticas en el Tratado. Este nuevo instrumento permitiría a los Estados miembros coordinar sus políticas según unas referencias, unas directrices y unos objetivos comúnmente definidos, adoptados por el Consejo y el Parlamento Europeo, a propuesta de la Comisión Europea.
- Queremos una Europa fuerte y dinámica en el mundo. Ésta debería asumir sus responsabilidades frente a los desafíos de la globalización. En el ámbito de la política exterior y de seguridad, la unanimidad necesaria en la toma de decisiones debería limitarse a la adopción de nuevas estrategias europeas. Los Estados miembros sólo deberían intervenir de conformidad con dichas estrategias o donde no existe una posición europea común. Deberían mantenerse la posibilidad de optar por una abstención constructiva.

- La prevención de conflictos precisa una atención especial y debemos desarrollar nuestra política de seguridad y defensa para poder desempeñar las tareas de mantenimiento de la paz (las llamadas "misiones de Petersberg") y aumentar nuestras capacidades operativas para la gestión de crisis militares y civiles. El despliegue de tropas debería quedar bajo el control nacional. La política de seguridad y defensa debe someterse a un control parlamentario adecuado. La Unión Europea debería tener una representación cada vez mayor en los organismos internacionales cuyas actividades están relacionadas con los ámbitos de competencia de la propia Unión Europea, lo cual no incidirá en los derechos de los Estados miembros a representarse a sí mismos en dichas organizaciones internacionales.
- La noción de la Unión Europea como un área de libertad, seguridad y justicia debe seguir la línea de la Carta de los Derechos Fundamentales. Las políticas deberían establecerse principalmente en la legislación marco. Esto permitiría a las autoridades nacionales y regionales definir minuciosamente la legislación de la forma que mejor responda a las necesidades locales. Al mismo tiempo, la Unión deberá ser capaz de aprobar legislación a escala de comunitaria cuando necesite aplicar normas comunes a todos los Estados miembros para tratar de solucionar problemas de carácter transfronterizo.

Cuando las competencias de la Unión Europea se limiten a la producción de legislación marco, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas debería estar facultado para tomar decisiones sobre las cuestiones que rebasen las competencias de la Unión.

La Unión Europea es la zona geográfica más grande del mundo en la que impera el libre comercio de bienes y servicios. El buen funcionamiento de este mercado es esencial por lo que las facultades de la Comisión en materia de competencia deberían salvaguardarse y reforzarse si es preciso. En los casos en que sea preciso adoptar medidas para ese buen funcionamiento –pero la armonización plena de las normas nacionales entre en conflicto con el principio de subsidiariedad o el principio de proporcionalidad– las instituciones deberían recurrir sólo a las medidas permitidas por los tratados para eliminar las distorsiones del mercado.

Por una Europa más abierta

Europa debe cambiar su forma de legislar y para ello debería utilizar los términos "ley" y "ley marco" en lugar de jerga confusa como "reglamento" y "directiva".

La Comisión Europea debe conservar su derecho exclusivo a proponer nuevas leyes y el Parlamento Europeo debe tener una participación total en la legislación a través de un procedimiento legislativo claro y único. La Unión europea debe crear un Consejo de Asuntos Legislativos nuevo y único, que debería legislar de manera abierta.

Un Consejo más funcional se reunirá en grupos especializados para coordinar la política de asuntos exteriores, de asuntos económicos, de justicia y asuntos interiores y de empleo y asuntos sociales. Los ministros nacionales, que se reunirán en el Consejo de Asuntos Generales, prepararán las cumbres de la Unión Europea.

El procedimiento presupuestario, que deberá reorganizarse como un procedimiento legislativo, se aplicará a la propuesta anual de la Comisión. Esta propuesta cubrirá los gastos (eliminando la distinción entre obligatorios y no obligatorios) y los recursos. A este efecto, los acuerdos pactados entre las instituciones en materia presupuestaria, así como el marco para mantener los gastos bajo control, deberán incorporarse en los tratados-(las llamadas "perspectivas financieras").

La Comisión Europea debería encargarse de establecer toda la legislación necesaria en lo referente a la ejecución y la coordinación.

El Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros deberían tener derecho a anular por una mayoría especial las medidas de la Comisión para aplicar decisiones.

Según esta estructura, más sencilla, de las instituciones de la Unión Europea, las reuniones de los Jefes de Estado o de Gobierno (el Consejo Europeo), en las que se definirán las prioridades estratégicas de la Unión, tendrán una función específica y más amplia en las políticas de asuntos exteriores, seguridad y defensa.

Los tribunales europeos garantizarán el total respeto del Derecho europeo por parte de los Estados miembros y las instituciones europeas, así como la defensa y el desarrollo de los derechos de todos los ciudadanos europeos y las personas que residan en Europa en virtud de la Constitución y los Tratados.

Por unas instituciones más efectivas

Debe revisarse el acuerdo por el que la Presidencia del Consejo se transmite cada seis meses de un país de la Unión Europea a otro, ya que interfiere en la continuidad de la política del Consejo. Un mandato más duradero para la nueva Presidencia, cuyo objetivo sería salvaguardar la continuidad de las políticas del Consejo, debería formar parte de un acuerdo más amplio basado en la igualdad entre los Estados miembros y en el equilibrio general entre las instituciones.

La unanimidad debería aplicarse sólo a la legislación que tiene un impacto constitucional o que está relacionada con cuestiones vitales de soberanía nacional. La legislación restante debería someterse a votación y aprobarse por mayoría cualificada y atendiendo a la mayoría doble: de los Estados miembros y del conjunto de la población de la Unión Europea. Este es el modo más justo y fácilmente comprensible de tomar las decisiones a escala de la Unión Europea.

Los Europeos necesitan pronunciarse con una sola voz a nivel internacional. Por ello, deberíamos poner fin a la duplicación confusa de las funciones del Alto Representante del Consejo para la política exterior y de seguridad común y del Comisario responsable de la política exterior. Un nuevo portavoz europeo en materia de política exterior respondería en última instancia ante Consejo Europeo.

Debería ensalzarse la autoridad del Presidente de la Comisión Europea, en primer lugar, dándole mayor legitimidad democrática y, en segundo lugar, confiriéndole el derecho de asignar las responsabilidades políticas a los Comisarios, para formar el grupo más competente posible.

Por unas instituciones más democráticas

El Parlamento Europeo debe dar su consejo y, cuando sea oportuno, su aprobación, con respecto a todos los nombramientos de importancia constitucional. Estas normas también deberían aplicarse a los acuerdos internacionales.

El Parlamento Europeo debe controlar nuevas actividades europeas relativas a la justicia y la política interior, respetando el principio por el cual las cuestiones de carácter penal deben ser una responsabilidad primordial de los Estados miembros.

Todas las instituciones europeas deben aplicar el principio de equilibrio entre hombres y mujeres cuando se procede a los nombramientos.

El trabajo de todas las instituciones europeas debería basarse en el principio de transparencia absoluta. Los principios de acceso público a los documentos oficiales deberían extenderse a todas las instituciones y órganos de la Unión Europea. La Constitución debería establecer la libertad de publicación y establecimiento de normas para la restricción del derecho de las instituciones a identificar las fuentes de información.

La Constitución debería proteger el derecho de los ciudadanos a una buena administración. Todas las instituciones de la Unión Europea deberían estar obligadas a cumplir normas vinculantes sobre el buen comportamiento administrativo y a informar a los ciudadanos de lo que tienen derecho a esperar.

Los parlamentos nacionales deben tener un papel más fuerte, en particular, en la garantía del cumplimiento del principio de subsidiariedad, sin necesidad de crear nuevas instituciones. En varios aspectos de la política de la Unión Europea se precisa una cooperación más estrecha. Con todo esto mejoraremos los mecanismos democráticos de control.

Debe apoyarse la importante labor de las regiones y los gobiernos locales. Su autoridad debería salvaguardarse mejor y la Unión Europea debería estar abierta a propuestas en las que tuviesen una mayor participación en la elaboración de las normas comunitarias y en la aplicación de las mismas sobre el terreno.

Por último, para conseguir una Europa más democrática es preciso que el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y los ciudadanos de Europa participen en las futuras enmiendas de la nueva Constitución Europea.
